

# PERIODICO OFICIAL



DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

SEGUNDO SEMESTRE

LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES  
 SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE  
 EN ESTE PERIODICO

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO NUM.:001-1082  
 CARACTERISTICAS: 113182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GRAL. DEL GOBIERNO DEL EDO.

## S U M A R I O PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CONVENIO.-	De Colaboración Administrativa en materia Fiscal - Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Durango.-.....	PAG.1,315
ACUERDO.-	Que modifica al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías que deben ostentar etiquetas de información comercial en idioma español en el punto de entrada de la mercancía al país.-.....	PAG.1,343
ACUERDO.-	No. A/26/96, del C. Procurador General de la República, mediante el cual se designa como titular de la Unidad Especializada en la investigación y Persecución de Delitos Cometidos por Miembros de la Delincuencia Organizada al Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.-.....	PAG.1,345
REGLAMENTO.-	De la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis.-.....	PAG.1,346

A V I S O -

Por el que se hace del conocimiento público la elección de Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la designación de Secretario General de Acuerdos, la integración e instalación de cada una de sus Salas, así como la elección de su respectivo Presidente y el señalamiento de su domicilio. ....

PAG. 1, 350

## ACUERDO.-

General por el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asume el conocimiento -- de los asuntos que quedaron pendientes en el ex - tinto Tribunal Federal Electoral.-.....

PAG. 1, 351

## ACUERDO.-

Que reforma al diverso que autoriza las tarifas --  
por los servicios aeroportuarios que presta el or-  
ganismo descentralizado Aeropuertos y Servicios --  
Auxiliares. ....

PAG. 1,352

## ACUERDO.-

Del Tribunal Agrario por el que se determina el cambio de la sede principal del Distrito 6, así como el de su sede alterna; se determina la instalación de la sede alterna del Distrito 20; así mismo se modifica la competencia territorial de los distritos 6,7 y 20, de los tribunales agrarios correspondientes. - .....

PAG. 1.353

**CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.**

El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se denominará la "Secretaría", representada por su titular el C. Dr. Guillermo Ortiz Martínez y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango al que en lo sucesivo se denominará el "Estado", representado por los CC. Lic. Maximiliano Silerio Esparza, Lic. Alfredo Bracho Barbosa e Ing. Francisco Gamboa Herrera, en su carácter de Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas y de Administración del Estado, respectivamente, con fundamento en los siguientes artículos de la legislación federal: 25, 26 y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 fracciones II, XI, XIV, XV y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6o. fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; y en la legislación estatal, en los artículos: 70 fracciones I, XXIII y XXX, 73 fracción I de la Constitución Política del Estado de Durango; 25 fracciones III y IV, 26 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 53, 66 y 74 fracción XIX de la Ley General de Hacienda del propio Estado, y

## CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los principios normativos de la conducción del desarrollo económico y social de la nación y establece las bases para la integración y funcionamiento de la planeación nacional, como instrumento para lograr el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución y las leyes otorgan al Estado como rector de la vida económica, social, política y cultural del país.

Que dentro del Sistema Nacional de Planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolla una función de apoyo al proyectar y calcular los ingresos públicos tomando en cuenta las necesidades del gasto y el equilibrio financiero del erario federal y que un marco jurídico adecuado permitirá el cumplimiento de los objetivos y prioridades para que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y los programas que contiene, se realicen de manera efectiva, reconociendo, en todo momento que los cambios que imperan al presente, pueden obligar su modificación y actualización.

Que el Plan propone impulsar un nuevo federalismo para fortalecer a los Estados y los Municipios y fomentar la descentralización y el desarrollo regional, por lo que impulsar la colaboración administrativa entre la Federación y los gobiernos locales en materia fiscal, tiene el doble propósito de otorgar simultáneamente mayores ingresos y atribuciones a las entidades federativas, en correspondencia con sus responsabilidades institucionales y sus funciones públicas.

Que en el marco del pacto federal, entendido éste como una relación política, económica y social que implica la corresponsabilidad de todas las entidades, el Plan Nacional de Desarrollo identifica al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como un instrumento clave del federalismo, dinámico y perfectible, a través de una transformación y actualización permanente, basada en la realidad, mediante un proceso de examen, evaluación y modificación tanto en materia legislativa como en administración.

Que dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa ha sido objeto de estrategia y redefinición de quehaceres y responsabilidades de las entidades federativas, Municipios y el Gobierno Federal, por esta razón han sido celebrados convenios y anexos que a su vez han sido substituidos por otros en los que las labores específicas a realizar son el resultado de las políticas nacionales.

Que lo anterior significa también, que las entidades y sus Municipios no son meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino que son parte actuante de la administración tributaria nacional, pues de ellas

depende también en forma esencial la mejoría en los sistemas de administración de los conceptos denominados ingresos coordinados, siendo algunos tan importantes como el impuesto al valor agregado.

Que el esfuerzo desarrollado por las entidades federativas es congruente con las directrices de la Planeación Nacional y las enseñanzas y experiencias acumuladas en la operación de los convenios de colaboración administrativa y sus anexos han demostrado un desenvolvimiento de la capacidad administrativa de las entidades federativas y Municipios, lo cual ha hecho posible el incremento de los recursos a los tres niveles de gobierno.

Que la firma de un convenio en el que además de continuar con las facultades delegadas a los Estados, éstas se amplíen, obedece a la necesidad de instrumentar y darle aplicación al contenido del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en el que se establece que "debe mejorar la colaboración administrativa entre la Federación y los gobiernos locales en materia fiscal. En particular, deben aprovecharse las ventajas comparativas de cada nivel de gobierno para realizar las tareas de fiscalización y deben introducirse incentivos que premien a los gobiernos locales cuando contribuyan a lograr un cumplimiento amplio y correcto de las obligaciones fiscales".

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la concertación de un nuevo convenio de colaboración administrativa entre la Federación y el Estado en el que se incluyan nuevas facultades y responsabilidades como son las correspondientes a la realización de actos de comprobación en materia del impuesto al valor agregado sin la presencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo un programa coordinado, que se denominará "fiscalización concurrente".

Que igualmente el Estado, podrá realizar actos de comprobación del impuesto sobre la renta e impuesto al activo, simultáneamente con la revisión al impuesto al valor agregado, con las excepciones que en el propio convenio se establecen.

Que asimismo, son delegadas al Estado facultades en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de contribuyentes sujetos a régimen simplificado en el impuesto sobre la renta, en los mismos términos que se establecen para el impuesto al valor agregado.

Que como consecuencia de dicha delegación en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios, el Estado llevará a cabo todos los actos de determinación del impuesto omitido y sus accesorios, incluso a través del procedimiento

administrativo de ejecución, exigencia y seguimiento de la garantía del interés fiscal y asimismo, resolverá sobre los recursos administrativos, en los términos del Código Fiscal de la Federación cuando éstos se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por el Estado y que tratándose de la intervención en juicio, el Gobierno Federal ha considerado conveniente que el Estado asuma la defensa de las resoluciones que él mismo haya emitido en el ejercicio de sus funciones, independientemente de la intervención que a la Secretaría corresponda.

Que por otra parte, el Estado se obliga a cumplir las metas fijadas en el convenio en materia de verificación del padrón de contribuyentes y en caso contrario le serán aplicables los descuentos correspondientes, cuyas cantidades una vez descontadas de sus participaciones o incentivos, serán distribuidas al resto de las entidades que hayan cumplido con sus metas, de conformidad con la fórmula establecida basada en excedentes de contribuyentes verificados.

Que también es de resaltarse que, en apoyo a la presencia fiscal, se ampliarán las facultades del Estado en la función recaudatoria de algunos ingresos coordinados y sus accesorios. Estos serán recibidos en las instituciones de crédito autorizadas por la entidad o en las oficinas recaudadoras que autorice el propio Estado; se autoliquidarán y, en su caso, reintegrarán a la Tesorería de la Federación lo correspondiente. De esta manera, se liga el esfuerzo recaudatorio con la obtención de recursos inmediatos.

Que igualmente, se incluye la obligación del Estado de continuar con la integración y actualización de un registro estatal vehicular, independientemente de que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos sea del orden federal o estatal. Este instrumento de control protege por una parte, la integración de la industria automotriz nacional y, por otra, facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales en esta materia y constituye fuente de información, tanto en el ámbito tributario como en otras instancias gubernamentales.

Que por otra parte, las entidades federativas continuarán con las facultades delegadas en materia aduanera, sobre vehículos de procedencia extranjera de ilegal estancia o tenencia en el país.

Que en lo que respecta a incentivos económicos a recibir por el Estado y sus Municipios, además de los conceptos por los que hasta la fecha ha percibido, se incluyen expresamente los correspondientes a: los impuestos sobre la renta y al activo; en el impuesto al valor agregado: 100% de las multas impuestas por la falta del dictamen fiscal; 100% de las multas impuestas por la omisión de obligaciones del contribuyente; en el impuesto

especial sobre producción y servicios: 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y sus correspondientes accesorios. Asimismo, el incremento del 21% a 50% por las actividades de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales y del 65% al 80%, tratándose de gastos de ejecución en esta materia.

Que en materia de verificación de vehículos de procedencia extranjera, excepto automóviles deportivos y/o de lujo, el Estado percibirá el 100% de los vehículos embargados precautoriamente por él u otros con un valor equivalente, una vez que hayan sido adjudicados al fisco federal. Además para el caso de que los vehículos se encuentren inutilizados permanentemente para la circulación, la entidad podrá enajenarlos y percibirá el 95% del producto neto de dicha enajenación.

Que toda vez que la administración de los ingresos federales a que este convenio se contrae, serán realizados por el Estado y sus Municipios, es indispensable que la programación, normatividad y evaluación de estas tareas esté en manos del Gobierno Federal y que ello garantiza la uniformidad de los sistemas en todo el país, respecto del sentido y alcance de las normas tributarias para que los contribuyentes reciban igual trato por parte de las autoridades fiscales y para que se establezcan las bases de operación con la necesaria uniformidad y asimismo se evalúe la eficiencia en el manejo de los ingresos federales operados por el Estado, siempre dentro de un marco de respeto a las autoridades estatales competentes en materia fiscal. Las entidades federativas podrán formular propuestas sobre la determinación de sus metas y de los actos de fiscalización para la programación conjunta.

Que el sistema de compensación de fondos y rendición de la cuenta comprobada requiere un procedimiento que perfeccione al que actualmente se sigue.

~~Que~~ por todo lo anterior, la Secretaría y el Estado, acuerdan celebrar el presente convenio, en los términos de las siguientes

**CLAUSULAS:****SECCION I****DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERA.-** El objetivo del presente convenio es que las funciones de administración de los ingresos federales, que se señalan en la siguiente cláusula, se asuman por parte del Estado, a fin de ejecutar acciones en materia hacendaria dentro del marco de la planeación nacional del desarrollo.

**SEGUNDA.-** La Secretaría y el Estado convienen coordinarse en:

I. Impuesto al valor agregado, respecto de las facultades que en este convenio se establecen expresamente, en las cláusulas séptima y octava.

II. Impuesto sobre la renta e impuesto al activo, en los términos que se establecen en las cláusulas séptima y octava.

III. Impuesto especial sobre producción y servicios, en los términos que se establecen en las cláusulas séptima y octava.

IV. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, en los términos de la cláusula novena.

V. Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Estado, excepto las destinadas a un fin específico y las participables con terceros así como las impuestas por la Secretaría y sus organismos desconcentrados, en los términos de la cláusula décima.

**VI. El ejercicio de las facultades relacionadas con las siguientes actividades:**

a). Las referidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en relación con las contribuciones y en los términos que se establecen en la cláusula decimaprimer.

b). La comprobación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 29 y 42 fracción V del Código Fiscal de la Federación, en los términos señalados en la cláusula decimasegunda.

c). Las de verificación de la legal estancia o tenencia en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, en los términos de la cláusula decimatercera.

**TERCERA.-** La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la cláusula segunda de este convenio se efectuarán por el Estado, en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este convenio.

Por ingresos coordinados se entenderán todos aquéllos en cuya administración participe el Estado ya sea integral o parcialmente en los términos de este convenio.

**CUARTA.-** Las facultades de la Secretaría, que conforme a este convenio se confieren al Estado, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales.

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales del propio Estado, que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio, en relación con contribuciones locales.

Mediante pacto expreso con la Secretaría, el Estado, por conducto de sus Municipios, podrá ejercer parcial o totalmente las facultades que se le confieren en este convenio.

Para el ejercicio de las facultades conferidas, la Secretaría y el Estado convienen en que éste las ejerza, en los términos de la legislación federal aplicable.

**QUINTA.-** El Estado informará en todos los casos a la Secretaría, a través de la administración local jurídica de ingresos territorialmente competente, sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que se tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en materia de este convenio, salvo los de defraudación fiscal y sus equiparables.

Tratándose de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, el Estado deberá acordar los casos con la Secretaría, por conducto de la administración local de auditoría fiscal territorialmente competente.

**SEXTA.-** El Estado y la Secretaría se suministrarán recíprocamente la información que requieran, respecto de ingresos y actividades coordinados.

La Secretaría permitirá la conexión de los equipos de cómputo del Estado a sus sistemas de información, así como el Estado a la Secretaría, a fin de que cuenten con acceso directo para instrumentar programas de verificación y fiscalización.

## SECCION II

### DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES.

**SEPTIMA.-** Respecto del impuesto al valor agregado en el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos; así como en las oficinas de la autoridad competente. Estas mismas facultades las podrá ejercer el Estado respecto del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto especial sobre producción y servicios, simultáneamente con la revisión del impuesto al valor agregado.

Quedan excluidos del ejercicio de las facultades en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al activo previstas en esta cláusula, los siguientes contribuyentes:

- a). Los que integran el sistema financiero a que se refiere el último párrafo de la fracción III, del artículo 7o-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- b). Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las controladas, en los términos del Capítulo IV del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- c). Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control presupuestal.

También quedan excluidos las otras entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales de la Secretaría.

Tratándose del impuesto especial sobre producción y servicios, dichas facultades sólo se ejercerán por el Estado en relación con los contribuyentes sujetos a régimen simplificado en el impuesto sobre la renta.

La Secretaría, por conducto de la Administración General de Recaudación, proporcionará al Estado mensualmente, información sobre las solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes.

El Estado ejercerá además, las siguientes facultades:

I. En materia de determinación de impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas:

- a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.
- b). Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este convenio corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.
- c). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.
- d). Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.

II. En materia de recaudación:

- a). Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.
- b). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.

Las cantidades que correspondan al Estado, como resultado de las acciones en materia de fiscalización de estos impuestos, serán pagadas en las instituciones de crédito que al efecto autorice él mismo o en las oficinas recaudadoras que autorice el propio Estado.

III. En materia de autorizaciones, el Estado otorgará las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. En materia de recursos administrativos, el Estado tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este convenio.

V. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para estos efectos, el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le soliciten.

El Estado informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale la propia Secretaría, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

OCTAVA.- En materia de fiscalización del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y del impuesto especial sobre producción y servicios, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Realizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, en una proporción anual de 20% de dicho padrón, conforme a los lineamientos y normatividad emitidos para tal efecto.

Para los efectos de esta fracción, se considera padrón de contribuyentes, al registro sistematizado de obligados en los impuestos a que se refiere esta cláusula, así como en las demás contribuciones federales que regule la Secretaría.

II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con el Estado.

III. Llevar a cabo los actos de fiscalización en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.

IV. Asistir a las reuniones semestrales con las administraciones regionales y locales de auditoría fiscal competentes, en las que participarán la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas y las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación y Jurídica de Ingresos. El objeto de estas reuniones será el de evaluar por parte de la Secretaría los avances y las acciones realizadas por el Estado. Asimismo, se hará un seguimiento de las acciones que en esta materia se realicen a efecto de informar los resultados en las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

**NOVENA.-** El registro y control de vehículos, excepto aeronaves, así como las funciones operativas de administración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, que se señalan en las fracciones siguientes, se ejercerán por el Estado. Para la administración del citado impuesto, el Estado ejercerá las funciones inherentes a la recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de la legislación federal aplicable.

Tratándose de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio del Estado, las facultades de la Secretaría en materia aduanera se otorgan al mismo en forma expresa y limitativa en la cláusula decimatercera del presente convenio.

I. En materia de registro y control vehicular, excepto aeronaves, el Estado establecerá el registro estatal vehicular, relativo a los vehículos que les expida placas de circulación en su jurisdicción territorial y lo mantendrá actualizado para su integración al Sistema Integral de Información Tributaria.

Para control y vigilancia del registro, el Estado ejercerá por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes facultades:

- a). Efectuar los trámites de inscripción, bajas, cambios y rectificaciones que procedan en el registro, conforme a las reglas generales que expida la Secretaría.
- b). Realizar actos de verificación y comprobación para mantener actualizado el registro del Estado, conforme a los lineamientos y normatividad correspondientes.
- c). Recibir y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones y demás documentos que conforme a las diversas disposiciones legales aplicables deban presentarse.
- d). Diseñar y emitir los formatos para control vehicular y el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, los cuales deberán contener como mínimo los siguientes requisitos:

Datos generales: Entidad Federativa; año fiscal que se cubre.

Datos del propietario: Nombre o razón social; registro federal de contribuyentes; domicilio; código postal.

Datos del vehículo: Marca; modelo; año modelo; número de cilindros; origen o procedencia; número de motor; número de chasis; número de placas.

e). Informar a la Secretaría de los movimientos efectuados en el registro estatal vehicular y reponer dicho registro en su totalidad, conforme a los medios magnéticos y periodicidad que establezca la Secretaría.

II. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos.

b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto, su actualización y accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades.

c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.

d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo, así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente.

e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el impuesto y sus accesorios que él mismo determine.

III. En materia de devoluciones, compensaciones y pago a plazos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Autorizar las solicitudes de devolución o compensación de cantidades pagadas indebidamente y, en su caso, efectuar el pago correspondiente.

b). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. En materia de multas en relación con el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Imponer las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de este impuesto, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por él mismo.

b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades que se señalan en esta cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos.

V. En materia de recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, el Estado tratará y resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este convenio.

VI. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le solicite.

VII. En materia de consultas del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, el Estado resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente, conforme a la normatividad emitida al efecto por la Secretaría.

DECIMA.- Tratándose de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, la Secretaría conviene con el Estado, en los términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en que éste efectuará a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden expresamente y se publique en el órgano de difusión oficial del Estado, las siguientes facultades:

I. Notificar las multas referidas, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar unas y otros, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de infractores domiciliados en el Estado o, en su caso, en el Municipio de que se trate.

Sin embargo, respecto de las multas impuestas por las autoridades de tránsito federal, su importe corresponderá al Municipio en donde se efectuó el pago sin importar el domicilio del infractor o, en su caso, al Estado.

La recaudación de las multas mencionadas se efectuará por el Municipio de que se trate o, en su caso, por el Estado, a través de sus oficinas recaudadoras.

II. Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente.

III. Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

El Estado podrá ejercer directamente las facultades a que se refiere esta cláusula.

**DECIMAPRIMERA.**- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. El Estado exigirá de los contribuyentes la presentación del documento respectivo en materia de:

a). Impuesto sobre la renta propio o retenido.

b). Impuesto al valor agregado.

c). Impuesto al activo.

d). Impuesto especial sobre producción y servicios, sólo en relación con los contribuyentes sujetos a régimen simplificado en el impuesto sobre la renta.

II. La Secretaría proporcionará al Estado los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que el Estado exija su cumplimiento.

III. El Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago de los impuestos omitidos, su actualización y accesorios.

b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones a que se refiere esta cláusula.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiere determinado.

en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos períodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas.

e). Hacer efectiva al contribuyente con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios legales, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c), d) y f) de esta fracción.

IV. En materia de recaudación, el Estado recibirá por conducto de las instituciones de crédito que autorice él mismo o de las oficinas recaudadoras que autorice el propio Estado, las declaraciones, las contribuciones y sus accesorios; asimismo, determinará y cobrará las diferencias que provengan de errores aritméticos.

V. El Estado autorizará el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

VI. El Estado proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación.

**DECIMASEGUNDA.-** En relación con lo dispuesto en los artículos 29 y 42 fracción V del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría y el Estado convienen en que éste ejerza las siguientes facultades:

I. Verificar, a través de visitas de inspección, con base en una programación compartida y coordinada por la Secretaría, el uso de máquinas registradoras de comprobación fiscal en establecimientos o locales ubicados en el territorio del Estado, así como la expedición de comprobantes fiscales, de acuerdo con la normatividad emitida para tal efecto.

II. Imponer, notificar y cobrar las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, en

relación con la facultad a que se refiere la fracción anterior. En su caso, el Estado las cobrará a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Las multas impuestas por el Estado se pagarán en las instituciones de crédito que al efecto autorice él mismo o en las oficinas recaudadoras que autorice el propio Estado.

Para el ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula, la Secretaría proporcionará al Estado el padrón de los contribuyentes obligados a expedir comprobantes fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Para los efectos de evaluación, se estará a lo dispuesto en la cláusula octava, fracción IV, de este convenio.

**DECIMATERCERA.-** En materia de vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves y embarcaciones, internados en el territorio del Estado, éste tendrá a su cargo, por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes facultades y obligaciones:

I. Dar cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en la Ley Aduanera y sujetarse a la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para el efecto emita la Secretaría.

II. Ordenar y realizar la verificación de la legal estancia en territorio nacional de los vehículos en circulación, procediendo, en su caso, al embargo precautorio de los mismos.

La Secretaría se reserva el derecho de establecer períodos en los cuales no se podrán ejercer las facultades delegadas en esta fracción.

III. Levantar el acta respectiva en caso de embargo precautorio y notificar al interesado el inicio del procedimiento que corresponda, el cual será tratado y resuelto por la administración local de auditoría fiscal correspondiente, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría.

IV. Poner a disposición de la administración local de auditoría fiscal competente los vehículos embargados, acompañando las actuaciones correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y ocho horas a partir del embargo. Los vehículos, excepto los deportivos y de lujo, serán resguardados y custodiados por el Estado, hasta que cause ejecutoria la resolución dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera.

Los vehículos embargados precautoriamente por el Estado que hayan sido adjudicados a favor del fisco federal, una vez que cause ejecutoria la resolución, éstos u otros con un valor equivalente, se entregarán a aquél, excepto automóviles deportivos y de lujo, siempre que sean destinados al ejercicio de sus funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados. Previo aviso a la Secretaría, dichos vehículos también podrán ser intercambiados con otras entidades federativas para igual fin.

Conforme a las políticas y lineamientos que fije la Secretaría, el Estado podrá enajenar los vehículos de que se trata, siempre que éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación.

V. Dar el aviso correspondiente a la Secretaría, en caso de siniestro de vehículos adjudicados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste ocurra.

VI. Vigilar la legal estancia en el país de vehículos de origen y procedencia extranjera, que circulen en su territorio; negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular; y no aceptar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en los casos en que no se acredite la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.

VII. Asistir a las reuniones semestrales con las administraciones regionales y locales de auditoría fiscal competentes, en las que participarán la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas y las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación y Jurídica de Ingresos. El objeto de estas reuniones será el de conocer los avances y evaluar las acciones realizadas por el Estado, procurando que éstas sean celebradas en las mismas fechas y lugares que las referidas en la cláusula octava, fracción IV de este convenio. Asimismo, se hará un seguimiento de dichas acciones, a efecto de informar los resultados en las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

### SECCION III

#### DE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS

**DECIMACUARTA.-** El Estado percibirá por las actividades de administración fiscal que realice con motivo de este convenio, los siguientes incentivos:

I. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto al valor agregado y sus accesorios, con base en la acción fiscalizadora en dicho gravamen.

II. 100% de las multas que él mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se generen, por los requerimientos de solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes derivados de la realización de actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

III. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, en materia del impuesto al valor agregado, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente.

IV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, en materia del impuesto al valor agregado, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de ese impuesto y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.

V. 75% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y sus correspondientes accesorios, con base en la acción fiscalizadora del Estado en dichos gravámenes. El 25% restante corresponderá a la Federación.

VI. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto especial sobre producción y servicios y sus accesorios, únicamente tratándose de contribuyentes sujetos a régimen simplificado en el impuesto sobre la renta, con base en la acción fiscalizadora en dicho gravamen.

VII. Tratándose de la verificación a la que se refiere la fracción I de la cláusula octava, se descontará de la participación correspondiente, la cantidad que resulte de multiplicar el doble del costo de cada acto de verificación al padrón de contribuyentes no realizado por el Estado. Dicho costo será equivalente a cinco salarios mínimos vigentes en la zona geográfica a la que corresponde el Distrito Federal.

Determinados los importes a que se refiere esta fracción, éstos serán descontados por la Secretaría de los incentivos o participaciones que correspondan al Estado, en el siguiente ejercicio fiscal.

El 50% de los importes descontados será distribuido entre las entidades federativas que hayan cumplido con sus metas de verificación del padrón de

contribuyentes, en razón directa al número de contribuyentes excedente del programa a que se refiere la fracción I de la cláusula octava de este convenio; la distribución se hará conforme a la siguiente fórmula:

a). Se sumarán los contribuyentes que se hayan revisado adicionalmente a las metas de todas las entidades federativas.

b). Se sumarán los importes de los descuentos de todas las entidades, para integrar el fondo de premiación.

c). Se dividirá el fondo de premiación entre el total de contribuyentes revisados, excedentes de la meta, para obtener el valor de premiación por cada contribuyente excedente.

d). El valor de premiación por cada contribuyente excedente, se multiplicará por el número de contribuyentes que haya revisado en exceso cada entidad. El resultado será el importe del incentivo de cada entidad.

El 50% restante corresponderá a la Federación.

VIII. 100% de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, incluyendo recargos y multas que se obtengan en su territorio, por la realización de las funciones operativas de administración de dicho impuesto.

IX. 98% de las multas impuestas por autoridades federales no fiscales a que se refiere la cláusula décima, de cuya cantidad se destinará como incentivo un 90% a sus Municipios, siempre y cuando éstos efectúen la recaudación. El 2% restante corresponderá a la Federación.

X. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales, a que se refiere la cláusula decimaprimerá de este convenio:

a). 50% sobre el monto de los impuestos y recargos que se recauden por el Estado, con motivo de los requerimientos formulados por él mismo. El 50% restante corresponderá a la Federación.

b). 100% de las multas que él mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.

c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

d). 80% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos que se determinen conforme a lo señalado en la fracción III de la cláusula decimaprimer de este convenio. El 20% restante corresponderá a la Federación.

XI. 100% del monto efectivamente pagado por las multas impuestas como resultado de la acción fiscalizadora del uso de las máquinas registradoras de comprobación fiscal y por la inspección de la expedición de comprobantes fiscales y el cobro coactivo de dichas multas.

XII. 100% de los vehículos embargados precautoriamente por el Estado y que hayan sido adjudicados definitivamente al fisco federal, u otros con un valor equivalente, excepto automóviles deportivos y de lujo.

XIII. 95% del producto neto de la enajenación de vehículos a que se refiere la fracción IV de la cláusula decimatercera de este convenio. El 5% restante corresponderá a la Federación.

XIV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, en todos los casos a que se refiere la cláusula decimatercera de este convenio.

XV. Cuando el Estado otorgue la documentación a que se refiere la fracción VI de la cláusula decimatercera de este convenio, a vehículos cuya importación definitiva al país no sea acreditada, la Secretaría hará de su conocimiento la violación específica por ésta descubierta, para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, la propia Secretaría, en su caso, efectuará un descuento de los incentivos o participaciones que correspondan al Estado en términos de ley, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la legislación aplicable.

La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula, sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos.

En ningún caso corresponderán al Estado dos o más de los incentivos a que se refiere esta cláusula en relación con el mismo pago efectuado por el contribuyente o por terceros.

Cuando los créditos determinados por el Estado hayan sido pagados mediante compensación, éste percibirá los incentivos a que tenga derecho por actos de fiscalización, siempre que aquélla sea procedente en los

términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y de las reglas generales correspondientes.

El Estado percibirá los incentivos que le correspondan conforme a esta cláusula, cuando el contribuyente corrija su situación fiscal después de iniciadas las facultades de comprobación fiscal.

#### SECCION IV

#### DEL SISTEMA DE COMPENSACION DE FONDOS Y DE LA RENDICION DE CUENTA MENSUAL COMPROBADA DE INGRESOS COORDINADOS.

**DECIMAQUINTA** .- El Estado, a más tardar el 25 de cada mes o día hábil siguiente, enterará a la Tesorería de la Federación, por conducto del Banco de México, a través de sus correspondentes, o bien de una institución bancaria que la propia Tesorería autorice, mediante abono a la cuenta que le sea comunicada, el importe de los ingresos federales captados en el mes inmediato anterior, una vez que se haya descontado el 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, incluyendo recargos y multas recaudados por el Estado en el período referido, así como el monto de los otros incentivos que le corresponden, en los términos de la cláusula decimocuarta de este convenio y que sean recaudados directamente por él.

**DECIMASEXTA**.- El Estado rendirá a la Secretaría, por conducto de la administración regional de recaudación o, en su caso, de la administración local de recaudación respectiva, a más tardar el 10 de cada mes o día hábil siguiente, la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados. Esta incluirá los resultados de lo recibido al último día hábil de cada mes.

El Estado enviará a la administración local de recaudación respectiva, cifras preliminares dentro de los primeros 5 días de cada mes.

**DECIMASEPTIMA**.- Los Municipios, en su caso, rendirán al Estado, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su circunscripción territorial proveniente de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales y sus accesorios. El Estado incluirá los resultados del cobro en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados que formule a la Secretaría y enterará a la Federación el 2% de todo lo recaudado en la entidad por este concepto.

El Estado presentará a la Secretaría cada dos meses, informes y estados comparativos de cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente.

En lo aquí no previsto, el Estado se ajustará a los sistemas y procedimientos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición de la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados a que se refiere el presente convenio. La Secretaría intervendrá en cualquier tiempo para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, en los términos de las disposiciones respectivas.

**DECIMA OCTAVA.-** La Secretaría, a través de la Tesorería de la Federación, cubrirá mensualmente al Estado los anticipos a cuenta de participaciones en los fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, de la siguiente manera:

I. A más tardar, al día hábil siguiente del período de recaudación del impuesto al valor agregado, una cantidad que se calculará mediante la aplicación, a todas las entidades federativas, de un coeficiente determinado por la Secretaría y referido en la cláusula cuarta de las transitorias de este convenio, aplicado a las participaciones que le correspondieron al Estado en el mes inmediato anterior al del cálculo del anticipo, en los fondos antes citados.

II. A más tardar el 25 de cada mes o día hábil siguiente, se efectuará la compensación entre las participaciones provisionales del mes y el anticipo del mes inmediato anterior a que se refiere la fracción I de esta cláusula, con la finalidad de determinar los saldos correspondientes. El entero a la Tesorería de la Federación de los saldos a cargo del Estado se realizará de acuerdo con lo establecido en la cláusula decima quinta.

**DECIMANOVENA.-** La Secretaría y el Estado convienen en compensar mensualmente los créditos y adeudos, que deriven de las cláusulas anteriores.

Para estos efectos, a más tardar el 25 de cada mes o día hábil siguiente, la Secretaría entregará al Estado la constancia de participaciones del mes corriente y éste proporcionará a la Tesorería de la Federación la constancia de recaudación de ingresos federales del mes inmediato anterior. Si de la confrontación de ambos documentos, el Estado resulta deudor neto de la Federación, le remitirá a la Federación el original del recibo de entero por la diferencia resultante al Banco de México a través de sus correspondales, o institución bancaria autorizada por la Tesorería de la Federación, por el

abono en la cuenta establecida para tal fin en los términos de la cláusula decimaquinta.

Si la Federación resulta deudora neta del Estado, le enterará al Estado en el lapso restante del mes, la diferencia entre las participaciones que le corresponden y el importe de la constancia de recaudación.

## SECCION V

### DE LAS FACULTADES RESERVADAS A LA SECRETARIA

**VIGESIMA.**- Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula vigesimasegunda de este convenio, la Secretaría se reserva las siguientes facultades:

- I. Formular querellas, declaratoria de perjuicio y solicitar el sobreseimiento en procesos penales.
- II. Tramitar y resolver los recursos de revocación que presenten los contribuyentes contra las resoluciones definitivas que determinen contribuciones o accesorios, excepto los casos previstos en las cláusulas séptima fracción IV y novena fracción V de este convenio.
- III. Notificar y recaudar, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, el importe de las determinaciones de los impuestos al valor agregado, especial sobre producción y servicios, sobre la renta y al activo, que hubiera formulado la propia Secretaría.
- IV. Interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
- V. Interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente.
- VI. Intervenir en los juicios de amparo en los que se impugne la constitucionalidad de una ley o reglamento de naturaleza fiscal.

**VIGESIMAPRIMERA.**- La Secretaría ejercerá las facultades de Planeación, Programación, Normatividad y Evaluación de los ingresos coordinados. El Estado podrá formular propuestas sobre la determinación de sus metas; así como de los actos de fiscalización para la programación conjunta a través de los Comités y Subcomités de Programación.

Para los efectos de este convenio, se entenderá por:

**Planeación:** Actividad orientada a precisar las prioridades y objetivos en materia de los ingresos y actividades coordinados y establecer los lineamientos de política y los mecanismos para su ejecución.

**Programación:** Proceso mediante el cual se determinan las metas y actos de fiscalización a realizar por el Estado.

**Normatividad:** Las disposiciones que se emitan a través de instructivos, circulares, manuales de procedimientos y de operación, resoluciones de carácter general y criterios que regulan las contribuciones materia de este convenio, así como la aplicación del mismo, entre otras, las que señalen el manejo del sistema de compensación de fondos y de rendición de cuenta comprobada.

**Evaluación:** Proceso mediante el cual se determinará o precisará por parte de la Secretaría periódicamente el grado de avance en cada uno de los programas respecto de las funciones conferidas al Estado y sus Municipios, en materia de ingresos y actividades coordinados, así como sus posibles desviaciones, modificaciones y la instrumentación de las medidas de ajuste necesarias para cumplir con ellos.

La planeación, la programación, la normatividad y las medidas que resulten de la evaluación, serán obligatorias para el Estado.

**VIGESIMASEGUNDA.-** La Secretaría podrá en cualquier tiempo ejercer las atribuciones a que se refiere este convenio, aún cuando hayan sido conferidas expresamente al Estado, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con éste último.

## SECCION VI

### DEL CUMPLIMIENTO, VIGENCIA Y TERMINACION DEL CONVENIO

**VIGESIMATERCERA.-** La Secretaría convendrá con el Estado los programas de trabajo y fijación de metas para el ejercicio de las funciones relacionadas con los ingresos y actividades coordinados. El Estado informará periódicamente del cumplimiento de dichas metas.

Los acuerdos respectivos serán suscritos, tratándose de las autoridades fiscales del Estado, por el titular de las finanzas en éste y por el funcionario responsable del área que maneje la función o el ingreso coordinado sobre el que verse dicho programa y por la Secretaría, el Subsecretario de Ingresos y el Director General de Coordinación con Entidades Federativas, conjuntamente con el Director o Administrador General correspondiente.

Tratándose del sistema de compensación de fondos, los citados programas de trabajo o acuerdos, también deberán estar suscritos por el Tesorero de la Federación.

A falta de programas o cuando el Estado no ejerza alguna de las funciones que asume en este convenio, la Secretaría prestará su apoyo realizando temporalmente la función de que se trate.

**VIGESIMACUARTA.**- La Secretaría podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este convenio ejerza el Estado, cuando éste incumpla alguna de las obligaciones señaladas en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con anticipación. El Estado podrá dejar de ejercer alguna o varias de dichas atribuciones, en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a la Secretaría.

Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, se publicarán tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su notificación y surtirán efectos al día siguiente de la publicación en este último.

Cualquiera de las partes puede dar por terminado este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su notificación y surtirá efectos al día siguiente de su publicación en este último. Si la terminación se solicita por el gobierno del Estado, dicha solicitud se publicará además en el Periódico Oficial del propio Estado.

## TRANSITORIAS:

**PRIMERA.-** Este convenio se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1997, fecha en que, con la excepción contenida en la cláusula siguiente, quedan sin efecto el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1989 y los Anexos Nos. 2, 3, 6, 8, 9 y 10 y, en su caso, sus respectivas modificaciones, al propio convenio, celebrados por la Secretaría y el Estado, mismos que han quedado integrados en el texto del presente convenio.

**SEGUNDA.-** Subsiste la vigencia de los Anexos 5, 12 y 13 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal citado en la cláusula que antecede, publicados en el Diario Oficial de la Federación, celebrados por la Secretaría y el Estado, mismos que se entenderán referidos a los términos de este convenio.

**TERCERA.-** En relación con el impuesto sobre la renta e impuesto al activo, a que se refiere la cláusula séptima de este convenio, tratándose de las personas morales del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de las personas morales a que se refiere el Título II-A de dicha ley, el Estado se obliga a capacitar a sus recursos humanos. Para los efectos de la elaboración de los programas de capacitación correspondiente, el Estado podrá contar con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y del Instituto Nacional de Capacitación Fiscal (INCAFI).

**CUARTA.-** Para efectos de lo dispuesto en la cláusula decimaoctava de este convenio y para el logro de una liquidez similar de las entidades federativas en relación con sus participaciones, se estableció un ajuste en los coeficientes de aplicación por medio del cual alcanzaron un nivel de 1.1.

**QUINTA.-** Los asuntos iniciados antes del 1 de enero de 1990 en materia de administración del impuesto al valor agregado, que a la fecha de entrada en vigor del presente convenio se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales del Estado, serán concluidos por éstas, en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre ese Estado y la Secretaría con fecha 3 de junio de 1988.

**SEXTA.-** Los asuntos iniciados hasta el día anterior al cual este convenio entre en vigor, en materia de fiscalización conjunta del impuesto al valor agregado, que a la fecha de entrada en vigor del presente convenio se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales de la Secretaría y del Estado, serán concluidos por ambas, en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1989. Los incentivos derivados de estos actos de fiscalización se determinarán conforme al procedimiento vigente al día anterior al en que este convenio entre en vigor.

**SEPTIMA.-** Los asuntos en materia del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, que a la fecha de entrada en vigor del presente convenio se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales del Estado, serán concluidos por éstas, en los términos del Anexo No. 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

**OCTAVA.-** Los asuntos a que se refiere la cláusula decimaprimer de este convenio, que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales del Estado, serán concluidos por éstas, en los términos del Anexo No. 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

**NOVENA.-** Los asuntos a que se refiere la cláusula decimatercera de este convenio, que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes, serán tramitados y en su caso concluidos por el Estado o por la Secretaría según corresponda, en los términos de la cláusula décima del Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

**DECIMA.-** Para los efectos de lo dispuesto en la cláusula decimatercera de este convenio, se consideran automóviles deportivos o de lujo los excluidos en el listado de vehículos de la convocatoria publicada el 12 de abril de 1994, en la que se comunican las bases para el otorgamiento de permisos de importación, con el objeto de realizar la internación definitiva de aquellos vehículos de procedencia extranjera modelos 1986 o anteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de abril de 1994.

México, D. F., 25 de octubre de 1996.

**POR EL ESTADO  
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**

  
Lic. Maximiliano Sillerio Esparza

**EL SECRETARIO GENERAL  
DE GOBIERNO**

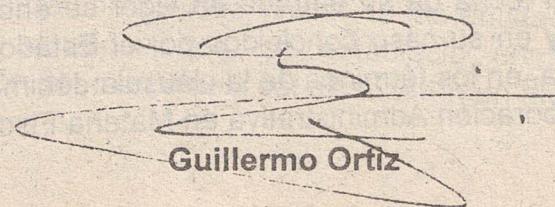
  
Lic. Alfredo Bracho Barbosa

**EL SECRETARIO DE FINANZAS Y  
DE ADMINISTRACION**

  
Ing. Francisco Gamboa Herrera

**POR LA SECRETARIA**

**EL SECRETARIO**

  
Guillermo Ortiz

## SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

ACUERDO que modifica al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías que deben ostentar etiquetas de información comercial en idioma español en el punto de entrada de la mercancía al país.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

HERMINIO BLANCO MENDOZA, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 36 fracción I inciso c) de la Ley Aduanera; 4o. fracción III; 16, 17, 20, 25 y 27 de la Ley de Comercio Exterior, 1o. fracción III, 33 y 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y

### CONSIDERANDO

Que con fecha 26 de diciembre de 1995 fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en las cuales se clasifican las mercancías que deben ostentar etiquetas de información comercial en idioma español en el punto de entrada de la mercancía al país;

Que por diverso publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de junio de 1995, fue reformado dicho Acuerdo, con el objeto de incorporar, previa aprobación de la Comisión de Comercio Exterior, la identificación de nuevas mercancías;

Que conforme a lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior y a la Ley Aduanera, sólo las mercancías identificadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en términos de las fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda, podrán sujetarse a restricciones o regulaciones no arancelarias;

Que la Comisión de Comercio Exterior, conforme al procedimiento señalado en la ley de la materia, ha aprobado la inclusión en el Acuerdo indicado de nuevas mercancías, he tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE IDENTIFICA LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION EN LAS CUALES SE CLASIFICAN LAS MERCANCIAS QUE DEBEN OSTENTAR ETIQUETAS DE INFORMACION COMERCIAL EN IDIOMA ESPAÑOL EN EL PUNTO DE ENTRADA DE LA MERCANCIA AL PAIS.**

**ARTICULO 1o.-** Se eliminan del artículo 1 del Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías que deben ostentar etiquetas de información comercial en idioma español en el punto de entrada de la mercancía al país, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día 26 de diciembre de 1995 y modificado mediante diverso dado a conocer en el mismo órgano oficial el 28 de junio de 1996, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, que a continuación se indican:

0401.10.01  
0401.20.01  
0401.30.01  
0402.10.01  
0402.21.01  
0402.29.99  
0402.91.01  
0402.99.01  
1602.41.01

**ARTICULO 2o.-** Se eliminan del artículo 2 del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, que a continuación se indican:

0401.10.01  
0401.20.01  
0401.30.01

**ARTICULO 3o.** Se adicionan al artículo 1 del Acuerdo señalado en el artículo 1o. del presente ordenamiento, las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, que a continuación se indican:

8407.21.01	Con potencia igual o superior a 65 C.P.
8407.21.99	Los demás.
8479.89.25	Compactadores de basura.
8708.10.03	Defensas completas, reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automóviles hasta de diez plazas.
9502.91.01	Prendas y sus complementos (accesorios) de vestir, calzado, y sombreros y demás tocados.
9504.90.03	Bolos o pinos de madera, aparatos automáticos para acomodar los bolos o pinos y regresar las bolas a su lugar de lanzamiento, sus partes o piezas sueltas. Únicamente: bolos o pinos de madera.
9506.31.99	Los demás.

#### TRANSITORIO

**UNICO.** El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre de 1996, con excepción de lo señalado en el artículo 3o., lo cual entrará en vigor un mes después de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 31 de octubre de 1996.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, **Herminio Blanco Mendoza**.- Rúbrica.

## PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACUERDO número A/26/96, del ciudadano Procurador General de la República, mediante el cual se designa como titular de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos Cometidos por Miembros de la Delincuencia Organizada al Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO NUMERO A/26/96, DEL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA COMO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION Y PERSECUCION DE DELITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL COMBATE A LAS DROGAS.

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o. fracciones I, II, III, IV y VIII; 3o., 4o.; 6o., 14, 15, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 4, 5, 6 y 8 fracción VII del Reglamento de la citada Ley; el artículo 8o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y demás relativos; y

### CONSIDERANDO

Que uno de los aspectos más importantes y significativos encomendados al Estado, es sin duda la procuración de justicia, atribución del Poder Ejecutivo Federal, ejercida a través del Ministerio Público de la Federación, cuya función principal es la tutela de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, así como la vigencia del estado de derecho y de las leyes ordinarias que emanan de aquélla, constituyendo una nueva filosofía y amplia protección ciudadana.

Que uno de los objetivos del Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 1995-2000 es el abatimiento a la impunidad por medio de una eficiente persecución del delito, lucha contra el crimen organizado en sus diversas manifestaciones, profesionalización del Ministerio Público de la Federación y sus órganos auxiliares, combate a la corrupción y prevención del delito.

Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, publicados el 10 de mayo y 27 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente,

establecen como atribución expresa de su Titular, determinar la organización y funcionamiento de la dependencia, así como adscribir orgánicamente las Unidades Administrativas y Organos que integran la Procuraduría General de la República; entre los que se encuentra el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, que es una Unidad Especializada del Ministerio Público de la Federación.

Que de acuerdo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, debe existir una Unidad Especializada, integrada por Agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por Agentes de la Policía Judicial Federal y Peritos, encargados de la investigación y persecución de ilícitos cometidos por miembros de asociaciones criminales.

Que en ese orden de ideas, a efecto de dar cabal cumplimiento a los instrumentos jurídicos señalados, procedo a expedir el siguiente:

### ACUERDO

**PRIMERO.-** La Unidad Especializada del Ministerio Público de la Federación, encargada de conocer de la investigación y persecución de los delitos a que se refiere la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se constituye en el Instituto Nacional del Combate a las Drogas, y su titular será el Comisionado del mismo.

**SEGUNDO.-** El Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, delegará para casos específicos en Agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Judicial Federal las atribuciones que refiere la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, bajo su más estricta responsabilidad. En cada acto de delegación se especificará la investigación a realizar y las responsabilidades que les correspondan.

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente.

**SEGUNDO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Méjico, Distrito Federal, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- El Procurador General de la República, F. Antonio Lozano Gracia. Rúbrica.

## PODER JUDICIAL

### SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

#### **REGLAMENTO de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

#### **REGLAMENTO DE LA COORDINACION GENERAL DE COMPILACION Y SISTEMATIZACION DE TESIS**

**ARTICULO 1.-** La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, denominada Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis en el Acuerdo de Administración Número Uno de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco, tiene la función de compilar, sistematizar, depurar y publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, proveer a su distribución y difusión y ser un órgano de consulta permanente de dichos criterios, así como detectar posibles contradicciones de tesis y proponer su denuncia a las instancias competentes.

**ARTICULO 2.-** Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

a) Suprema Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

b) Pleno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

c) Presidente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

d) Salas, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Comité, el Comité de Compilación, Sistematización y Publicación de Tesis y Ejecutorias;

f) Coordinación, la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis;

g) Coordinador General, el Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis;

h) Director General, el Director General del Semanario Judicial de la Federación; y

i) Semanario, la publicación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**ARTICULO 3.-** Para el desempeño de sus **funciones**, la Coordinación contará con los **siguientes** órganos:

a) Coordinador General;

b) Dirección General del Semanario Judicial de la Federación;

c) Secretaría Técnica Administrativa;

d) Unidad de Compilación y Sistematización de Tesis;

e) Unidad de Formación Editorial del Semanario;

f) Unidad de Contradicción de Tesis;

g) Unidad de Seguimiento y Producción de Discos Compactos;

h) Unidad de Obras Especiales y Control de Calidad;

i) Unidad de Sistemas y Procesos de Cómputo;

j) Unidad de Distribución de Publicaciones Oficiales;

k) Unidad de Consulta; y

l) Departamento de Lingüística.

**ARTICULO 4.-** El Coordinador General es el órgano competente para autorizar, en los términos de las disposiciones aplicables, la publicación y difusión de la jurisprudencia, tesis aisladas y ejecutorias del Pleno, de las Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como de los votos particulares y aquellos trabajos de especial relevancia e interés que realicen los órganos dependientes del Poder Judicial de la Federación.

Corresponde al Coordinador General:

a) Representar a la Coordinación;

b) Cumplir las políticas generales establecidas por el Comité, el Pleno y el Presidente;

c) Elaborar los manuales de funcionamiento de la Coordinación y modificarlos en el caso de que las necesidades lo requieran;

d) Diseñar, implementar y coordinar, con los responsables de cada área, los programas correspondientes;

e) Establecer los objetivos y programas de trabajo de las áreas a su cargo, supervisar su realización y evaluar su avance;

f) Intervenir en la redacción de las tesis del Pleno, de las Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme lo establezcan las normas correspondientes;

g) Proponer al Pleno y a las Salas proyectos de tesis;

h) Informar al Pleno y a las Salas sobre la posible existencia de una contradicción de tesis;

i) Dar cuenta al ponente de los obstáculos que puedan presentarse para la publicación de una ejecutoria o voto particular;

j) Proveer a la oportuna publicación de las ejecutorias, votos particulares y tesis que cumplan con los requisitos establecidos al efecto;

k) Solicitar a las diversas áreas de la Suprema Corte apoyo específico, relacionado con su función;

l) Informar al Pleno y al Comité, de las actividades de la Coordinación;

m) Atender las funciones administrativas de la Coordinación e informar al Presidente de su desarrollo;

n) Proponer al Comité las normas para regular la distribución y la venta al público del Semanario y de las diversas publicaciones propiedad de la Suprema Corte; y

ñ) Las demás funciones que le confieran las leyes y acuerdos.

**ARTICULO 5.-** La Dirección General del Semanario Judicial de la Federación es el órgano técnico encargado de dirigir y supervisar la preparación de la edición del Semanario, así como de las obras especiales cuya publicación se ordene.

Corresponde al Director General:

a) Auxiliar al Coordinador General en todas sus funciones;

b) Sustituir al Coordinador General durante sus ausencias;

c) Fungir como secretario en todas las reuniones internas de la Coordinación y hacer efectivos los acuerdos y resoluciones que se adopten;

d) Llevar el control de los proyectos, programas y procedimientos encomendados a los diferentes órganos de la Coordinación y proveer a su puntual cumplimiento;

e) Evaluar periódicamente, junto con los responsables de cada área, el desarrollo de los mencionados proyectos, programas y procedimientos;

f) Preparar los informes respectivos y formular propuestas al Coordinador General; y

g) Realizar las demás funciones que específicamente le asigne el Coordinador General.

**ARTICULO 6.-** La Secretaría Técnica Administrativa es el órgano de administración interna y de control de libros de la Coordinación. Se integra de tres secciones: Octava Epoca, Novena Epoca y Estandarización.

Corresponde a la Secretaría Técnica Administrativa:

a) Recibir la correspondencia general y las tesis por conducto de la Oficialía de Partes;

b) Clasificar y distribuir la correspondencia general y las tesis a las secciones correspondientes;

c) Formar y resguardar los libros maestros;

d) Llevar la estadística de las tesis;

e) Realizar los trámites administrativos;

f) Controlar el servicio de fotocopiado; y

g) Apoyar jurídica y administrativamente a las otras áreas de la Coordinación.

**ARTICULO 7.-** La Unidad de Compilación y Sistematización de Tesis es el área que se encarga de la organización y depuración de las tesis. Se compone de siete secciones: la primera relativa a la jurisprudencia y tesis aisladas del Pleno y las Salas, la segunda relativa a la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito y las restantes a las tesis aisladas de los Tribunales Colegiados de Circuito en las materias penal, administrativa, civil, laboral y común.

1. Corresponde a la Sección de Jurisprudencia y Tesis Aisladas del Pleno y de las Salas:

a) Recibir de la Secretaría Técnica Administrativa los proyectos y los textos de tesis, las ejecutorias y votos particulares;

b) Revisar, sistematizar y proponer modificaciones a los proyectos y textos de tesis;

c) Formular en su caso, los proyectos de tesis del Pleno;

d) Compilar el material cuya publicación se ordene;

e) Dar seguimiento a las tesis desde su aprobación hasta su modificación o interrupción;

f) Dar seguimiento a las ejecutorias del Pleno para la detección de criterios que constituyan nuevas tesis;

g) Mantener actualizada la base de datos de tesis;

h) Proponer al Coordinador General los rubros de las ejecutorias y votos particulares de los que no se haya elaborado tesis y que el Pleno y las Salas ordenen publicar;

i) Dar cuenta al Director General de los obstáculos que puedan presentarse para la publicación de una ejecutoria o voto particular;

j) Coordinarse con los Secretarios de Tesis;

k) Informar al titular de la Unidad de Contradicción de Tesis de las contradicciones que advierta; y

l) Las demás funciones que específicamente le asigne el Coordinador General y el Director General.

II. Corresponde a la Sección de Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito:

- a) Recibir de la Secretaría Técnica Administrativa los textos de las tesis y ejecutorias;
- b) Revisar, sistematizar y proponer modificaciones a los textos de las tesis;
- c) Compilar el material cuya publicación se ordene;
- d) Dar seguimiento a las tesis desde su aprobación hasta su modificación o interrupción;
- e) Mantener actualizada la base de datos de tesis;
- f) Dar cuenta al Director General de los obstáculos que puedan presentarse para la publicación de una ejecutoria;
- g) Coordinarse con los Secretarios de Tesis de los Tribunales Colegiados;
- h) Informar al titular de la Unidad de Contradicción de Tesis de las contradicciones que advierta; y
- i) Las demás funciones que específicamente le asignen el Coordinador General y el Director General.

III. Corresponde a las secciones de Tesis Aisladas de Tribunales Colegiados de Circuito en las materias penal, administrativa, civil, laboral y común:

- a) Recibir de la Secretaría Técnica Administrativa los textos de las tesis aisladas y los precedentes, votos particulares y ejecutorias;
- b) Compilar, revisar y sistematizar las tesis;
- c) Proponer modificaciones a las tesis;
- d) Mantener actualizada la base de datos de tesis;
- e) Dar seguimiento a las tesis desde su aprobación hasta su integración como jurisprudencia o su modificación;
- f) Coordinarse con los Secretarios de Tesis de los Tribunales Colegiados;
- g) Informar al titular de la Unidad de Contradicción de Tesis de las contradicciones que adviertan; y
- h) Las demás funciones que específicamente les asignen el Coordinador General y el Director General.

**ARTICULO 8.-** La Unidad de Formación Editorial del Semanario es el área encargada de integrar para su publicación las tesis, ejecutorias y votos particulares, así como los acuerdos emitidos por la Suprema Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal. Se integra por las Secciones de Suprema Corte y Tribunales Colegiados de Circuito.

Corresponde a la Unidad de Formación Editorial del Semanario:

- a) Recopilar, organizar y preparar las tesis, ejecutorias, votos particulares y acuerdos para su publicación;
- b) Elaborar los índices de las publicaciones;
- c) Dar cuenta al Director General de los obstáculos que puedan presentarse para la publicación;
- d) Supervisar y dar seguimiento al proceso de publicación; y
- e) Las demás funciones que específicamente le asignen el Coordinador General y el Director General.

**ARTICULO 9.-** La Unidad de Contradicción de Tesis es el área encargada de detectar los criterios contradictorios de las Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Corresponde a la Unidad de Contradicción de Tesis:

- a) Recibir de la Secretaría Técnica Administrativa las tesis, a efecto de hacer del conocimiento de las secciones respectivas aquéllas que guarden relación con las contradicciones denunciadas y resueltas;
- b) Informar al Coordinador General sobre la posible existencia de una contradicción de tesis;
- c) Formular los proyectos de denuncia de contradicción;
- d) Compilar la jurisprudencia por contradicción de tesis;
- e) Dar seguimiento a los expedientes de contradicción de tesis que se tramiten en las Salas y en el Pleno;
- f) Elaborar los índices de contradicciones; y
- g) Las demás funciones que específicamente le asignen el Coordinador General y el Director General.

**ARTICULO 10.-** La Unidad de Seguimiento y Producción de Discos Compactos es el área que se encarga de preparar el material publicado en el Semanario y en otras obras del Poder Judicial de la Federación, para integrar las bases de datos que permitan la edición del CD-ROM IUS, así como de otros discos ópticos.

**ARTICULO 11.-** La Unidad de Obras Especiales y Control de Calidad es el área que se encarga de coordinar los proyectos para la elaboración y edición de obras relevantes, relacionadas con los criterios emitidos por la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito; asimismo, se encarga de revisar las obras que se editan en la Coordinación a efecto de controlar su calidad.

**ARTICULO 12.-** La Unidad de Sistemas y Procesos de Cómputo es el área de enlace con la Dirección General de Informática de la Suprema Corte.

Corresponde a la Unidad de Sistemas y Procesos de Cómputo:

a) Proponer al Coordinador General la elaboración de los programas de cómputo para la consulta de las tesis;

b) Coordinar la actualización de los procesos de captura y procesamiento de información;

c) Definir las necesidades de capacitación del personal de la Coordinación en el uso de los diferentes programas de cómputo;

d) Investigar las necesidades de naturaleza informática de la Coordinación;

e) Proponer al Coordinador General la aplicación de innovaciones tecnológicas; y

f) Las demás funciones que específicamente le asigne el Coordinador General y el Director General.

**ARTICULO 13.-** La Unidad de Distribución de Publicaciones Oficiales es el área que se encarga de la recepción, resguardo, control y suministro del Semanario y de las demás publicaciones oficiales de la Suprema Corte.

Corresponde a la Unidad de Distribución de Publicaciones Oficiales:

a) Proponer al Coordinador General las normas para regular la distribución del Semanario a los órganos del Poder Judicial de la Federación;

b) Administrar los almacenes en donde se encuentran depositadas las obras y publicaciones editadas por la Suprema Corte;

c) Levantar inventarios de las obras y publicaciones existentes;

d) Integrar existencias mínimas de los ejemplares del Semanario y de las obras que a la fecha hayan sido publicadas por este alto tribunal, a fin de salvaguardar la memoria bibliográfica de la Suprema Corte;

e) Proponer al Coordinador General los programas para la donación de las obras editadas por la Suprema Corte; y

f) Las demás funciones que específicamente le asigne el Coordinador General.

**ARTICULO 14.-** La Unidad de Consulta es el área que se encarga de auxiliar a los órganos del Poder Judicial de la Federación, dependencias del sector público, litigantes y estudiosos del

derecho en la localización de información sobre los criterios sustentados en las tesis jurisprudenciales o aisladas que integran el acervo del Semanario, de los discos ópticos y demás obras editadas por la Suprema Corte.

**ARTICULO 15.-** El Departamento de Lingüística es el área que se encarga de depurar, mediante su corrección idiomática, los textos para su publicación.

**ARTICULO 16.-** El Secretario de Tesis de la Secretaría General de Acuerdos y los Secretarios de Tesis adscritos a las Salas dependerán directamente del Secretario General de Acuerdos y de los Presidentes de éstas, respectivamente, por lo que en el desarrollo de sus funciones deberán acatar sus instrucciones y se considerarán órganos de apoyo de la Coordinación en los términos que establezcan los acuerdos respectivos.

**ARTICULO 17.-** Los Secretarios de Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito dependerán directamente del Presidente de cada órgano colegiado, por lo que en el desarrollo de sus funciones deberán acatar sus instrucciones y se considerarán órganos de apoyo de la Coordinación en los términos que establezcan los acuerdos respectivos.

#### TRANSITORIOS:

**PRIMERO.-** Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deberá publicarse además en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que se opongan a lo establecido en este reglamento.

LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que este Reglamento de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, fue aprobado por el Tribunal Pleno en Sesión Privada de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de nueve votos de los señores ministros: Presidente, José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.- México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- Conste.- Rúbrica.

**AVISO** por el que se hace del conocimiento público la elección de Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la designación de Secretario General de Acuerdos, la integración e instalación de cada una de sus Salas, así como la elección de su respectivo Presidente y el señalamiento de su domicilio.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.

**AVISO**

Se comunica a las autoridades del Instituto Federal Electoral, a los partidos políticos nacionales, a las agrupaciones políticas y a los ciudadanos en general que, con fundamento en los numerales 94 párrafo primero y 99, párrafos segundo, tercero, octavo, noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos quinto y sexto transitorios del Decreto de reformas constitucionales publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de agosto del año en curso, así como con los artículos segundo y sexto transitorio del diverso Decreto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado oficialmente el 31 de octubre inmediato anterior, que:

1. En sesión pública de cinco de noviembre del presente año se instaló formalmente la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, teniendo como domicilio el edificio ubicado en la calle Carlota Armero número 5000, colonia Culhuacán CTM, código postal 04480, México, Distrito Federal.

2. Conforme a las disposiciones aplicables, la Sala Superior se integra con siete magistrados electos por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recayendo esta responsabilidad en los licenciados Leonel Castillo González, José Luis De la Peza Muñoz Cano, Eloy Fuentes Cerdá, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesta Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.

3. En la misma sesión pública de 5 de noviembre se eligió Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al magistrado José Luis De la Peza Muñoz Cano.

4. En sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada el 6 de noviembre en curso, a propuesta de su Presidente se designó Secretario General de Acuerdos del propio órgano jurisdiccional al doctor Flavio Galván Rivera. Asimismo, se eligieron a los Presidentes de las Salas Regionales, las cuales quedaron formalmente instaladas, con la siguiente integración y domicilio:

**PRIMERA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JAL.**

Presidente: Gabriel Gallo Alvarez.

Magistrados: Arturo Barraza y José Luis Rebollo Fernández.

Domicilio: Tapalpa número 1, colonia Vallarta Poniente, código postal 44110.

**SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, N.L.**

Presidente: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

Magistrados: Francisco Bello Corona y Maximiliano Toral Pérez.

Domicilio: Licenciado José Benítez número 606, entre Padre Mier y Matamoros, colonia El Obispado, código postal 64060.

**TERCERA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.**

Presidente: David Cetina Menchi.

Magistrados: Martha Leonor Bautista de la Luz y José Luis Carrillo Rodríguez.

Domicilio: Ursulo Galván número 156, colonia Centro, código postal 91000.

**CUARTA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO.**

Presidente: Francisco Javier Barreiro Perera.

Magistrados: Javier Aguayo Silva y María Silvia Ortega Aguilar de Ortega.

Domicilio: Carlota Armero número 5000, colonia Culhuacán CTM, código postal 04480.

**QUINTA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL, CON SEDE EN TOLUCA, MEXICO.**

Presidente: Ángel Rafael Díaz Ortiz.

Magistrados: Salvador Castro Zavaleta y Carlos Ortiz Martínez.

Domicilio: Cerrada Vicente Guerrero número 175, esquina Gómez Farías, Plaza San Buenaventura, colonia Morelos, código postal 50120.

Méjico, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- El Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **José Luis De la Peza**.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, **Flavio Galván Rivera**.- Rúbrica.

**PODER JUDICIAL**  
**TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER**  
**JUDICIAL DE LA FEDERACION**

**ACUERDO** General por el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asume el conocimiento de los asuntos que quedaron pendientes en el extinto Tribunal Federal Electoral.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.

En consideración a que en esta fecha se ha publicado y entrado en vigor el Decreto por el que se "REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL", con fundamento en los artículos 41, fracción IV, 94, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 201, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales primero y quinto transitorios del precitado Decreto de diecinueve de noviembre en curso, SE ACUERDA: A partir de esta fecha se asume el conocimiento de los asuntos que quedaron pendientes en el extinto Tribunal Federal Electoral; en consecuencia, díctense los acuerdos que correspondan en cada uno de los expedientes. Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** este acuerdo general y notifíquese por estrados a las partes interesadas. Así lo acordaron y firman, por unanimidad de votos, los CC. Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis: - El Magistrado Presidente, José Luis De la Peza.- Rúbrica.- Los Magistrados: Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerdá, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez, Mauro Miguel Reyes Zapata.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Flavio Galván Rivera.- Rúbrica.

**PODER EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**ACUERDO** que reforma al diverso que autoriza las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado el 22 de diciembre de 1995.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público y CARLOS RUIZ SACRISTAN, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 31 fracción X, 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 fracción V de la Ley de Planeación, 58 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 26 de su Reglamento, y

**CONSIDERANDO**

Que a efecto de mantener una estructura de precios y tarifas justas en los bienes y servicios de la administración pública federal, cuidando que representen una contraprestación que permita cubrir el costo del servicio, es indispensable considerar las necesidades y los diversos factores que inciden en la prestación del mismo;

Que uno de los objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es aumentar la eficacia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios y lograr que éstos sean prestados de manera competitiva y no discriminatoria en beneficio de los usuarios, y

Que con base en lo anterior resulta conveniente ajustar la estructura tarifaria por el cobro de servicios aeroportuarios y realizar una modificación a las mismas de manera que los incrementos mantengan las tarifas al nivel de noviembre de 1995, en términos reales, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO QUE REFORMA AL DIVERSO QUE AUTORIZA LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE DICIEMBRE DE 1995.**

**ARTICULO PRIMERO.**- Se autoriza al organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares el ajuste de las tarifas que aplica por los servicios que presta, las cuales están detalladas en los resolutivos primero a octavo del Acuerdo que

autoriza las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1993, y reformado por diverso publicado el 22 de diciembre de 1995, conforme a lo dispuesto en el presente instrumento.

**ARTICULO SEGUNDO.**- Se establece un incremento a las tarifas vigentes de 4.4% a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y para el mes de diciembre de 1996 un factor de ajuste de 1.01591 que se aplicará a partir del día primero de dicho mes. Durante 1997, se establece un factor de ajuste mensual acumulativo de 1.01172 que se aplicará a partir del día primero de cada mes.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.**- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.**- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaria que se opongan a lo previsto en este instrumento.

México, D.F., a 27 de noviembre de 1996.- Secretario de Hacienda y Crédito Público **Guillermo Ortiz Martínez**.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Carlos Ruiz Sacristán**.- Rúbrica.

## TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

**ACUERDO** del Tribunal Superior Agrario por el que se determina el cambio de la sede principal del Distrito 6, así como el de su sede alterna; se determina la instalación de la sede alterna del Distrito 20; asimismo se modifica la competencia territorial de los distritos 6, 7 y 20, de los tribunales agrarios correspondientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

**ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO POR EL QUE SE DETERMINA EL CAMBIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DISTRITO 6, ASÍ COMO EL DE SU SEDE ALTERNA; SE DETERMINA LA INSTALACION DE LA SEDE ALTERNA DEL DISTRITO 20; ASIMISMO SE MODIFICA LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS 6, 7 Y 20, DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS CORRESPONDIENTES.**

El Tribunal Superior Agrario, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 5o. y 8o. fracciones I, II y X de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el artículo 46 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, previo el análisis de los requerimientos en materia de justicia agraria en los estados de Coahuila, Durango y Nuevo León; y,

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 5o., 8o. fracciones II y III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el artículo 46 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior Agrario tiene las atribuciones para dividir el territorio de la República en distritos; determinar su número y los límites territoriales, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo; así como la de establecer la sede y sede alterna de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos, en los que ejercerán su jurisdicción, tomando en cuenta los volúmenes de trabajo;

Que por acuerdo del Tribunal Superior Agrario emitido en sesión celebrada el 8 de mayo de 1992, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del 16 de junio del mismo año, se establecieron distritos para la impartición de la justicia agraria y se fijó el número y la competencia territorial de los Tribunales Unitarios;

Que con base en las experiencias reunidas en la primera etapa de actividades de los tribunales agrarios, se expidió un nuevo acuerdo que modificó la competencia territorial de los distritos aprobado por el Tribunal

Superior Agrario el 22 de septiembre de 1993, y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 del mismo mes y año;

Que analizados los requerimientos para la impartición de la justicia agraria en los estados de Coahuila, Durango y Nuevo León, el Tribunal Superior Agrario estima conveniente, para el adecuado desarrollo de las funciones jurisdiccionales en esas entidades federativas, determinar el cambio de la sede principal del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, que se encontraba instalada en la ciudad de Saltillo, Coah., para constituirla en la ciudad de Torreón, de la misma entidad federativa, y establecer su sede alterna en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo., en la que serán atendidas y resueltas con prontitud e inmediatez las demandas de justicia agraria que promuevan los campesinos de la región de La Laguna del Estado de Durango, para que éstos no tengan necesidad de trasladarse a la capital de la citada entidad federativa para gestionarlas; también así, establecer en la ciudad de Saltillo, Coah., la sede alterna del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede principal en la ciudad de Monterrey, N.L.; y en consecuencia, se modifica el ámbito de competencia territorial de los Distritos 6, 7 y 20, respectivamente.

Por las razones antes expresadas y con fundamento en los preceptos legales citados, se emite el siguiente

#### ACUERDO:

**PRIMERO.-** Se dejan sin efectos los puntos primero y segundo del acuerdo aprobado por el Tribunal Superior Agrario, el 22 de septiembre de 1993, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de 29 del mismo mes y año, mediante el cual se modificó la competencia territorial de los Distritos.

**SEGUNDO.-** Se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 6, 7 y 20, para quedar en la forma siguiente:

I.- El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, tendrá como sede principal la ciudad de Torreón, Coahuila; se constituye su sede alterna en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por lo que deja de ser sede principal de este Distrito la ciudad de Saltillo, Coahuila; por consiguiente se modifica su ámbito de competencia territorial, el cual comprenderá los municipios que conforman la región de La Laguna, que se ubican en los estados de Coahuila y Durango, a saber:

#### COAHUILA:

1. Francisco I. Madero
2. Matamoros
3. San Pedro de las Colonias
4. Torreón
5. Viesca

#### DURANGO:

6. General Simón Bolívar
7. Gómez Palacio
8. Lerdo
9. Mapimí
10. Nazas
11. San Juan de Guadalupe
12. San Luis del Cordero
13. San Pedro del Gallo
14. Santa Clara
15. Tlahualilo

---

II. En consecuencia, se modifica el ámbito territorial del Tribunal Agrario del Distrito 7, con sede en la ciudad de Durango, Durango, cuya competencia territorial atendiendo a la división geográfica adoptada por el Tribunal Superior, comprenderá los municipios de:

1. Canatlán
2. Canelas
3. Coneto de Comonfort
4. Cuencamé
5. Durango
6. El Oro
7. Guadalupe Victoria
8. Guanaceví
9. Hidalgo
10. Indé
11. Mezquital
12. Nombre de Dios
13. Ocampo
14. Otáez
15. Panuco de Coronado
16. Peñón Blanco
17. Poanas
18. Pueblo Nuevo
19. Rodeo
20. San Bernardo
21. San Dimas
22. San Juan del Río
23. Santiago Papasquiaro
24. Súchil
25. Tamazula
26. Tepehuanes
27. Topia
28. Vicente Guerrero

III. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, continúa teniendo como sede principal la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y como sede alterna la ciudad de Saltillo, Coahuila; en consecuencia se modifica la competencia territorial de este Distrito, que comprenderá todos los municipios del Estado de Nuevo León, y los municipios del Estado de Coahuila siguientes:

1. Abasolo
2. Acuña
3. Allende
4. Arteaga
5. Candela
6. Castaños
7. Cuatrocienegas
8. Escobedo
9. Frontera

10. Gral. Cepeda
11. Guerrero
12. Hidalgo
13. Jiménez
14. Juárez
15. Lamadrid
16. Monclova
17. Morelos
18. Múzquiz
19. Nadadores
20. Nava
21. Ocampo
22. Parras de la Fuente
23. Piedras Negras
24. Progreso
25. Ramos Arispe
26. Sabinas
27. Sacramento
28. Saltillo
29. San Buenaventura
30. Sierra Mojada
31. San Juan de Sabinas
32. Villa Unión
33. Zaragoza

TERCERO.- En virtud de lo anterior, las demandas de juicios agrarios que se presenten o que se encuentren en trámite en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con sede en la ciudad de Durango, Dgo., que correspondan a los municipios de la región de La Laguna, que son competencia territorial del Distrito 6, deberán remitirse a la sede alterna de éste, una vez instalada, para que ahí se continúe su debida substanciación, suprimiéndose con esta prevención el que los justiciables tengan que trasladarse a la ciudad capital del Estado en mención.

CUARTO.- Respecto a las demandas de juicios agrarios que se presenten o se encuentren en trámite en la sede alterna del Distrito 20, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se continuarán atendiendo y resolviendo en la propia sede alterna de este Distrito.

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de diciembre de 1996, previa publicación en los órganos de difusión correspondientes.

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de los estados de Coahuila, Durango y Nuevo León, así como en un periódico de los de mayor circulación en esas entidades federativas.

Así, lo acordaron y firman los Magistrados que integran el Tribunal Superior Agrario, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe, en la sesión administrativa celebrada el 13 de noviembre de 1996.- El Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis O. Porte Petit Moreno.- Rubrica.- Los Magistrados: Gonzalo M. Armienta Calderón, Arely Madrid Tovilla, Rodolfo Veloz Bañuelos y Marco V. Martínez Guerrero, integrantes del Tribunal Superior Agrario.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Jesús Anlén López.- Rúbrica.